

Nájera.—Luis Velasquez.—M. Zavala.—
Enrique Landa, secretario.

Es copia. México, Abril 13 de 1874.—
Lic. Enrique Landa.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon por los CC. Secundino Roel, Manuel Sada y Antonio Zambrano, contra los efectos del artículo 3º del decreto de 23 de Diciembre de 1873, dado por la Legislatura del Estado y contra la Orden de 13 de Enero próximo pasado del Alcalde 1º, en que se inserta la del Gobierno de ese Estado, de la misma fecha.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor sustituto dice: en 15 del corriente los CC. Antonio Zambrano, Manuel Sada y Secundino Roel, piden en ocurso de fojas 6, 7 y 8, se les ampare contra el artículo 3º del decreto expedido por la H. Legislatura del Estado en 23 del último Diciembre, y contra una Orden dictada por el Alcalde 1º C. Jesus Gonzales Treviño, que dispone continúen los referidos ciudadanos prestando sus servicios como regidores en el presente año, por haber sido nombrados popularmente para dicho cargo en el año próximo anterior; agregan que el mismo C. Alcalde 1º les ha conminado con una multa de veinte pesos á cada uno, para el caso de que se nieguen á obsequiar aquellas disposiciones, y con estos procedimientos se violan en sus personas las garantías que á todo hombre otorga nuestra Carta fundamental en sus artículos 5º y 16; las que otorga el 5º, porque se les obliga á prestar un trabajo personal sin su pleno consentimiento, y sin justa retribucion, y las que otorga el

16, porque se les molesta con una exaccion injusta, por falta de fundamento legal.

En "Otiosí" de aquel ocurso y en dos escritos que posteriormente presentaron y que obran á fojas 11, 12 y 13 de este expediente, piden tambien la suspension prévia de los efectos del artículo y Orden reclamados; suspension que visto el informe del C. Alcalde 1º y oído el dictámen fiscal, se sirvió V. decretar, con fecha 20 del que cursa, pasando luego los antecedentes respectivos á aquella autoridad para que rindiera informe con justificacion sobre lo principal, segun lo previene el artículo 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, en cumplimiento de cuyo decreto la referida autoridad mandó el modelado informe de fojas 27 y 28 y los justificantes que obran desde la página 20 hasta la 26; por último, ha pasado V. el expediente al que suscribe para que dictamine como Promotor tambien sobre lo principal: paso á hacerlo.

El artículo 47 de la Constitucion del Estado y con mas claridad el 39 de la ley electoral, señalan el modo de cubrir las faltas de los funcionarios municipales, que ocurran dentro del año; pero ni en estas ni en otra ley alguna, está previsto el caso que hoy se presenta de que una eleccion sea declarada nula; aunque puede alegarse la costumbre establecida para tales casos de que continúe el Ayuntamiento del año anterior; pero no siempre la costumbre hace ley, ni menos cuando pugna con algun artículo constitucional, como sucede en este caso, en el que está en contradiccion con el 5º de la Constitucion general, puesto que obliga á los ciudadanos á prestar sus servicios por tiempo indefinido, sin su consentimiento y sin retribucion.

No estando reglamentado el referido artículo 5º, es muy dudoso que los ciudadanos estén obligados á prestar aquellos servicios sin indemnizacion, cuando no lo quieren hacer, aunque su nombramiento proceda del mismo pueblo, y con mucha mas razon procede esta duda si son nombrados por una

autoridad agena al poder electoral: no es equitativo que todos los funcionarios disfruten de una recompensa mas ó menos pingüe y solo no los municipales, que son quizá los que llevan sobre sí la carga mas penosa, y si no es equitativo ni justo obligarlos á prestar estos servicios sin su pleno consentimiento y justa retribucion, aun es menos equitativo compelerles por medio de multas y prisiones á que los presten, siendo así que otros funcionarios que disfrutaban de una retribucion mas que decente, solo son castigados con la privacion de los derechos de ciudadanía durante el tiempo que debería durar este encargo. Hay mas; con motivo de otra cuestion semejante, se ha probado que no corresponde al poder Legislativo decidir en materia de elecciones, en cuya consecuencia el artículo 3º del decreto de 23 de Diciembre, es anticonstitucional.

Por lo expuesto, y siendo obvio en sentir del que habia, que la Legislatura extralimite sus facultades con infraccion del repetido artículo 5º constitucional, al obligar á algunos ciudadanos á seguir fungiendo como municipales, es de sentir se resuelva: Único: la Justicia federal ampara y protege á los CC. Antonio Zambrano, Manuel Sada y Lic. Secundino Roel, contra los efectos del artículo 3º del decreto de 23 de Diciembre, y contra las diferentes órdenes que el C. Gobernador del Estado ha dictado mandando imponer una multa y reducir á prision á los referidos ciudadanos.

Monterey, 28 de Enero de 1874.—*M. Treviño.*

Es copia de su original que certifico. Monterey, 21 de Febrero de 1874.—*M. Treviño.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Monterey, 19 de Febrero de 1874.—Visito el juicio de amparo promovido por los CC. Lic. Secundino Roel, Manuel Sada y Antonio Zambrano, regidores del Ayunta-

miento de esta Ciudad, nombrados popularmente para el año próximo pasado de 1873, contra los efectos del artículo 3º del decreto de la Legislatura del Estado expedido el 23 de Diciembre último, por el que se dispuso que siguiera funcionando dicho Ayuntamiento de 1873, en el presente año, mientras que la junta de escrutadores de la municipalidad, cumplía con lo mandado en otro artículo, á lo que se ha resistido dicha junta, segun consta del mismo decreto mencionado, de que obra un ejemplar en estos autos (fojas 20,) y que se ve igualmente en el "Periódico Oficial" del Gobierno (fojas 2 vuelta;) y contra la orden del C. Alcalde 1º presidente del Ayuntamiento, en que, cumpliendo con otra superior, se les cita á desempeñar los cargos de regidores bajo la multa de veinte pesos, si no lo verifican (fojas 3, 4 y 5 de este expediente); con cuyas disposiciones consideran violadas en sus personas las garantías que aseguran los artículos 5º y 16 de la Constitucion federal de la República, que previene, el primero, que "nadie puede ser obligado á prestar trabajos personales, sin justa retribucion, y sin pleno consentimiento," el segundo que, "nadie puede ser molestado en su persona ó intereses, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente" y con "causa legal;" visto el dictámen del C. Jefe superior de hacienda que lleva la voz fiscal por ministerio de la ley, en que pide de conformidad con lo que solicitan los quejosos, y cuanto mas fué necesario ver.

Considerando: que si bien por un consentimiento general en la República, se ha interpretado y entendido, que los cargos municipales de eleccion popular se desempeñan gratuitamente; en el caso que se presenta, ya concluyó el termino ó período, por el que los quejosos tenían obligacion de desempeñar los suyos, conforme á la ley constitucional de 29 de Octubre de 1857, por cuyos artículos 4, 26 y 27, esos cargos duran un año nada mas, (fojas 3 del cuaderno de pruebas).

Considerando: que ni en la Constitución del Estado, ni en ninguna otra ley orgánica de ella, se encuentra consignada la facultad de prorogar el término referido, y de obligar á los ciudadanos á que presten esos servicios mas allá de él.

Considerando: que en una época normal como la presente, no puede haber mas regla que la Constitución federal y las de los Estados, conforme al artículo 41 de aquella y los demas relativos.

Considerando: que aunque es muy cierto que en algunos casos en que no se haya podido verificar la elección de un Ayuntamiento ó de varios, puede ser conveniente que continúen los funcionarios anteriores; esto lo que quiere decir es, que las Legislaturas, aprovechando las lecciones de la experiencia, deben consignar la reforma correspondiente para que así se haga en lo sucesivo.

Considerando: que por lo dicho se patentiza, que el artículo 3º del decreto de la Legislatura de este Estado, viola el 5º de la Constitución federal, puesto que se obliga á los quejados á prestar servicios personales, que solo con su pleno consentimiento podrían prestar, como lo han querido los otros ciudadanos que voluntariamente se han prestado á ello.

Considerando: que de lo que se acaba de asentar se infiere, que hay ilegalidad en el procedimiento violento que contra los quejosos se ha ordenado, y se comenzó á ejecutar, por que si los ampara el artículo 5º de la Constitución federal, contra el decreto de 23 de Diciembre último, mal se les puede molestar legítimamente en sus personas y en sus bienes, porque no se prestan á obsequiarlo, y con este procedimiento se infringe por tanto igualmente el artículo 16 de la misma Constitución federal.

Por todas estas razones y fundamentos legales, y de conformidad con los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1857, y la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, se resuelve.

Primero: la Justicia federal ampara y protege á los CC. Lic. Secundino Roel, Manuel Sada y Antonio Zambrano, contra los efectos del artículo 3º del decreto de 23 de Diciembre último dado por la Legislatura del Estado, y contra la Orden de 13 de Enero próximo pasado del C. Alcalde 1º, en que se inserta la del Gobierno de la misma fecha.

Segundo: notifíquese á quienes corresponda, y sacadas las copias debidas para la publicación de este fallo, remítanse estas diligencias á la Suprema Corte de Justicia para la revisión del mismo fallo.

El C. Lic. Cristóbal Chapa, Juez primer suplente del Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, en ejercicio por licencia del propietario, así lo resolvió, mandó y firmó, por ante mí. Doy fé.—*Cristóbal Chapa.*—*Pablo Borrego*, secretario.

Es copia que certifico. Monterrey, 21 de Febrero de 1874.—*Pablo Borrego*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 12 de 1874. Visto el juicio de amparo que ante el Juzgado de Distrito de Nuevo Leon, promovieron los CC. Secundino Roel, Manuel Sada y Antonio Zambrano, por infracción en su perjuicio del artículo 5º de la Constitución federal, haciendo responsable de este acto al alcalde 1º constitucional de Monterrey, que ejecutando por Orden del Gobierno del Estado el artículo 3º del decreto de la Legislatura, de 23 de Diciembre de 1873, exigía que dichos ciudadanos siguiesen funcionando como regidores, aun pasado su periodo legal, habiéndoles, por su resistencia á esta prevención, conminado primero, con una multa, y reduciéndoles luego á prisión: visto el informe de la autoridad responsable; las pruebas rendidas; el parecer fiscal: la sentencia del inferior y Considerando: que el

artículo 59 de la Constitución federal, garantiza en términos absolutos el derecho del hombre, á no ser obligado á un trabajo personal sin su consentimiento pleno y sin una justa retribucion; que no hay razones ni fundamento alguno legítimo para considerar exceptuados de la regla constitucional los cargos conseqüiles ó municipales; que en el caso presente, esta razon recibe aun nuevo vigor, por el hecho de no tener los quejosos de ninguna suerte, el carácter de municipales que habian perdido desde el instante que concluyó el periodo legal; que es por lo tanto evidente la violacion de la garantía consignada en el artículo 59.

Con fundamento de los artículos 101 y 102 de la Constitución federal, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del Juez de Distrito de Nuevo Leon, que en nombre de la Justicia Nacional ampara y protege á los CC. Secundino Roel, Manuel Sada y Antonio Zambrano.

Devuélvase los autos al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Asi por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, Marzo 28 de 1874.—*Lic. Emilio Ordaz*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Lic. Luis G. Ferniza, en representacion del C. español Antonio Llaguno, contra la orden de multa y prision librada por la Gefatura política de Sombrerete.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal alegando para definitiva en el juicio de amparo promovido por el C. Lic. Luis G. Ferniza apoderado del C. Antonio Llaguno, contra el procedimiento del Presidente municipal de Sain el Alto, que cumpliendo con una orden del Gefe político de Sombrerete, lo conminó con una multa de cien pesos que debía enterar en la receptoría de rentas de aquella Villa, en el término perentorio de veinticuatro horas, y que por su falta fuera remitido á aquella autoridad por medio de la fuerza de seguridad pública; mas como no se ha expresado el motivo porque se fulminaba aquella pena á dicho C. Llaguno, la autoridad responsable ha violado en su persona las garantías que otorgan los artículos 16 y 18 de la Constitución federal de la República, y por que el acto no fué determinado por autoridad competente que lo fundara y motivara; considerando por otra parte: que las autoridades políticas, no tienen jurisdiccion para fulminar contra nadie orden de prision ó multa pecuniaria y cualesquiera otra, pues segun el artículo del Código fundamental citado, solo hay lugar á prision ó multa por delito que merezca pena corporal; y como del acto que se reclama, aparece del documento número 1 de los presentados por el apoderado del C. Llaguno, que por haberse negado el comisario de la Hacienda del Saus á salir con una escolta de la finca para aprehender á un ladrón que robaba en el punto llamado "Vinata del Rincon del Aguila", solo dicho comisario es responsable y no el